

## Cuestión de responsabilidad

Jueves 12 de marzo. Una de la tarde. El Departamento de Educación comunica a los sindicatos que no es necesario suspender la actividad presencial en los centros educativos aragoneses; que están en constante comunicación con Sanidad y la situación está controlada. Ese mismo día, en el colegio donde trabajo, más de la mitad del alumnado no viene, las familias cierran el colegio antes que la administración.

Jueves 12 de marzo. Cuatro de la tarde. El presidente de Aragón comunica la suspensión de la actividad educativa presencial. Al parecer, el Departamento de Educación se entera al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía.

Lo relatado puede parecer una anécdota y, desde luego, tal descoordinación es en parte comprensible por la situación tan única de esos días. Sin embargo, se convertiría en el preludio de una gestión lamentable de la administración educativa aragonesa. No es lugar para enumerar todo lo su-

cedido, pero lo que anunciaba la 'anécdota' antes relatada, improvisación, falta de comunicación entre administraciones, contradicciones, menosprecio a los sindicatos (y en consecuencia al profesorado al que representan)? se convirtió en el día a día de la realidad educativa aragonesa. Lo que es en parte comprensible en marzo, deja de serlo en mayo, y ya no digamos en septiembre.

Empezamos el curso en Aragón en el pódium de CC AA con peores datos en incidencia de la covid-19 (aunque haya sido maquillada por la vuelta a la nueva normalidad, dictada 'por casualidad' justo antes del inicio de curso), y a su vez la que menos ha aumentado profesorado para afrontar la pandemia (1'5 por cada mil alumno/as, cuando la media española es de 5'76). Y no, no piensen que se aumenta poco porque ya había mucho. Aragón es la segunda CC AA, solo detrás de Cataluña, con menos profesorado por cada mil alumno/as (67,5 este año), casi un

27% menos que la media española.

Esta escasez de contrataciones impide que se puedan bajar ratios, medida esencial para prevenir contagios en las escuelas. Ratios ya de por sí altas, que ni siquiera cumplen el acuerdo sindical firmado por la Administración educativa hace unos años. Por ejemplo, en infantil y primaria el número de alumnos/as necesarios para el desdoble de un aula ha disminuido solo de 28 a 26. Poco esfuerzo parece.

Cualquier docente ¿o muchas AMPAS que están denunciando la precariedad con la que se ha iniciado el curso? sabe que faltan espacios; que falta profesorado para poder bajar ratios y aplicar la distancia de seguridad exigida; que faltan o son insuficientes los equipamientos de protección incumpliendo la legalidad de riesgos laborales? saben también que el profesorado especialmente vulnerable por presentar patologías de riesgo? ha sido obligado a in-

corporarse al puesto de trabajo sin una adaptación del mismo (algo ilegal evidentemente, pero recurrente en el Departamento de Educación ya que no dispone de una evaluación de los puestos de trabajo como le obliga una ley vigente desde hace 25 años).

Por otra parte, se ha trasladado toda la responsabilidad a los equipos directivos y al profesorado, a quienes se ha convertido de la noche a la mañana en técnicos de prevención de riesgos laborales y en personal sanitario. Pero tranquilidad, que si algo sale mal, la culpa y responsabilidad será individual: será que el profesorado, los equipos directivos, las familias, el personal de limpieza o el alumnado habrán hecho algo mal, porque los protocolos y las medidas de protección han sido las correctas.

Hablando de responsabilidades. Hay organizaciones sindicales que han decidido compartir con la Administración las que se puedan generar de lo que ocurra en este curso, dando por buena la situación descrita en este artículo. CGT, segundo sindicato en la enseñanza pública aragonesa, entiende que su responsabilidad es denunciar la ilegalidad y precarie-

dad de este inicio de curso, la inseguridad que se vive en los centros, la escasez de recursos que el Gobierno de Aragón dedica a paliar todo ello, y la opacidad de su gestión. Y apelamos a la responsabilidad individual del profesorado y de las familias y alumnado para que apoyen y respalden las movilizaciones que vamos a llevar a cabo, incluyendo una huelga el 18 de septiembre como último recurso para exigir al Gobierno que cumpla con su obligación e invierta en una vuelta al cole lo más segura posible.

Compartimos lo necesario que para nuestro alumnado es acudir a los centros para socializar y seguir aprendiendo, pero demandamos los recursos necesarios para esto sea posible sin riesgos inadmisibles. Y se puede hacer, es cuestión de inyectar recursos económicos, es decir, es cuestión de prioridades. Los y las docentes han hecho, hacen y harán lo posible para que el alumnado y sus familias tengan escuelas seguras y acogedoras. Únicamente le pedimos al Gobierno de Aragón y a su Departamento de Educación que hagan el mismo esfuerzo.

José Luis Ruiz Ramas es secretario general de CGT Enseñanza Zaragoza